

La estructura y la coyuntura en las luchas del movimiento campesino paraguayo	Título
Fogel, Ramón - Autor/a	Autor(es)
Una nueva ruralidad en América Latina?	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales	Editorial/Editor
2001	Fecha
	Colección
desarrollo rural; luchas campesinas; movimientos sociales; campesinos; Paraguay ;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100929015604/11fogel.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Seguí buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



La estructura y la coyuntura en las luchas del movimiento campesino paraguayo

Ramón Fogel*

Las transformaciones de la sociedad y de las movilizaciones campesinas (Fogel, 1998)

En el Paraguay, las características de la estructura agraria y sus transformaciones se corresponden con las modalidades que asumen las acciones colectivas de las capas campesinas. A la agricultura estancada y atrasada, que predominó hasta la década del '60, siguió una estructura agraria con marcado predominio de la empresa agraria modelada por la modernización conservadora e impulsada por el orden autoritario. La crisis del modelo agro-exportador que se manifiesta desde comienzos de la década del '90 se prolonga y profundiza hoy tomando nuevas formas, ya en el orden democrático. Dado que la agricultura es el sector productivo más importante, esa crisis se proyecta en el resto de la economía.

El Censo de 1991 perfila algunos rasgos de la estructura agraria actual y nos muestra las tendencias. Ese año, de las 400 mil familias rurales (la mitad del total a nivel nacional) dedicadas básicamente a actividades agropecuarias, el 75% accedía a parcelas familiares, en su gran mayoría lotes de menos de 20 has. Considerando la distribución de las 307 mil explotaciones censadas ese año, el 40% de las mismas (las menores a 5 has.) controlaba menos del 1% de la superficie total censada¹. La minifundización se profundizó a lo largo de la década del '80.

* Investigador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).

Las dos terceras partes de estas unidades campesinas tienen como cultivo de renta el algodón, y en esa medida sufren los efectos de la crisis algodonera. En el otro extremo de esta polarizada estructura agraria, las unidades mayores a 1000 has. representaban en 1991 el 1% de las explotaciones pero se adjudicaban el 77% de la superficie total censada. Dichas explotaciones son detentadas por los grupos con peso decisivo en la estructura de poder, en los cuales predominan las orientaciones marcadamente conservadoras.

La referida concentración de la tierra, una de las más marcadas de América Latina, está en la base de los conflictos agrarios abiertos y potenciales. La cuestión de la tierra permea a todos los grupos dominantes de la sociedad: desde los sectores que controlan el capital financiero hasta los funcionarios influyentes son hacendados y tienen sus intereses ligados a la tierra. Estos actores sociales dominantes también son actores políticos, circunstancia que protege doblemente los intereses ligados al latifundio.

En cuanto a la producción agropecuaria, los productos más dinámicos fueron el algodón, ligado a la economía campesina, y la soja, producida por las unidades productivas tipo *farmer* (de 50 a 200 has.) y por las medianas y grandes empresas. Estos rubros representaron el 70% de la exportación registrada en 1989, y el 37% de la producción agrícola. En la década del '90 un hecho notable está dado por la caída de los cultivos tradicionales destinados al mercado interno y al autoconsumo campesino. En estos años la expansión de la pobreza en el campo se proyecta en la emigración significativa a centros urbanos. Es notable el crecimiento simultáneo de la producción agrícola -básicamente de la soja- y la pobreza campesina a partir de mediados de la década del '80 (véase Anexo 1).

La acción colectiva en el campo también sufrió transformaciones, de modo tal que las movilizaciones campesinas aisladas entre sí que se extinguían con la consecución de la parcela familiar, se articularon a nivel nacional y ganaron fuerza en la década del '70, con las ligas agrarias. Estas organizaciones reaccionaron contra los procesos de modernización en los que se ignoraba de diverso modo a las capas campesinas, pero fueron brutaemente desarticuladas por el orden autoritario. Lo que podría haber sido una auténtica revolución social, resultó abortado a sangre y fuego por el orden autoritario articulado por la dictadura stronista.

Ya en el régimen democrático, ante el agravamiento de la crisis socioeconómica, por primera vez en la historia social y política las organizaciones campesinas se movilizan en todo el país, y el 15 de marzo de 1994 miles de campesinos se manifiestan pacíficamente en apoyo de sus demandas. En estas movilizaciones tiene incidencia la transición a la democracia, que en una sociedad agraria como la paraguaya está fuertemente condicionada por la naturaleza de las demandas campesinas y sus movilizaciones, y por las formas en que las mismas son procesadas por el sistema político y el estado. Por otra parte, las posibilidades de la acción colectiva campesina aparecen fuertemente condicionadas por las caracterís-

ticas de la estructura social rural y nacional, según se discutirá en las formulaciones que siguen. La democracia, irrelevante de cara a las demandas de las capas campesinas, es severamente alterada en marzo -el mes de las movilizaciones campesinas- de 1999, con el derrocamiento del gobierno electo por notable diferencia de votos, en manifestaciones con importante participación campesina. El golpe de estado y la nueva alianza de cúpulas que permitió el regreso del stronino y de los barones de Itaipú, viejos verdugos de los campesinos, excluyó aún más a éstos, quienes no tuvieron otra opción que el uso de la violencia para viabilizar sus demandas.

La modernización conservadora

A comienzos de los años '60 la población del país era escasa; una tercera parte se mantenía básicamente por medio de la agricultura de subsistencia, una vez que los enclaves agroindustriales que explotaban la yerba y la madera habían declinado substancialmente.

La concentración de la tierra, que constituía ya entonces un rasgo básico del contexto socio-histórico, intensificó las luchas por la tierra. Estas movilizaciones, que tuvieron ya significación histórica a principios de este siglo, se particularizaron en torno a la lucha por el acceso a la parcela familiar. Las luchas más extendidas geográfica y temporalmente fueron las articuladas por bandoleros sociales y líderes mesiánicos, que constituyeron las formas de lucha social disponibles históricamente en una sociedad sin canales de participación política y que subalterniza a los campesinos².

El rasgo saliente de la estructura de poder luego de la guerra del Chaco (1935) fue la inestabilidad política, basada en el hecho de que ninguno de los grupos dominantes podía imponer su hegemonía. La situación de empate cambia con el acceso al poder del General Stroessner. Superada la crisis de dominación política con la consolidación del orden autoritario desde mediados de los años '60 se redefinen en el marco de prácticas prebendarias las políticas agrarias, de modo de viabilizar un modelo agro-exportador. En la dinámica emergente, orientada a la modernización de la estructura productiva del campo, se impulsa la constitución y consolidación de la gran empresa agrícola operada con tecnología de punta.

Como resultado de las transformaciones anotadas se polariza la estructura social rural, de modo tal que en las posiciones dominantes aparecen nuevos actores: el moderno empresariado agrario, incluyendo a los *facendeiros*, y las capas de empresarios familiares de tipo *farmer*, que operan explotaciones mecanizadas, con tamaños que oscilan entre las 50 y las 200 has. Entre los empresarios tienen importante presencia los hacendados brasileños o *facendeiros*.

En el otro extremo los minifundistas -que operan en explotaciones de menos de 5 has.- representaban más del 40% de las unidades económicas campesinas. Los campesinos reasentados entre 1970 y 1982 constituían en el final del período referido la cuarta parte del total de unidades productivas. Esta forma de expansión de la frontera agrícola descongestionó en alguna medida la presión sobre la tierra, de modo tal que las explotaciones de menos de 5 has representaron en 1981 el 36% del total.

La agro-exportación implicó también el vuelco de las unidades campesinas a los cultivos comerciales a expensas de los cultivos de subsistencia. Así, el algodón, que representaba el 5% de las exportaciones en los años 1972/73, pasó a constituir el 47% de las exportaciones diez años después.

La constitución y expansión de la gran empresa se dio en no pocos casos a costa de los campos comunales de pastoreo de las comunidades campesinas. Por lo demás, la modernización autoritaria descalificó sistemáticamente al conocimiento y a las prácticas tradicionales, que asociaba al atraso. Mientras tanto, como resultado, comenzaban a debilitarse la identidad social y los vínculos sociales de las capas campesinas en aquellas regiones más castigadas por la atomización social.

Ante estas transformaciones orientadas a la constitución de una agricultura moderna a costa de la economía campesina, reaccionan las capas de cultivadores, movilizadas en las ligas agrarias, las cuales constituían organizaciones de base que se articulaban hacia arriba. La reacción en cuestión se hizo sentir ante los intentos de cercamiento de los campos comunales de pastoreo. En el campo educativo, el renacimiento de las tradiciones y de la cultura criolla se expresó en las escuelas campesinas, en las que se enseñaba en guaraní, constituidas como alternativa a la educación oficial.

Cuando las ligas llegan a formar una organización nacional y en esa medida se constituyen en una amenaza a los intereses representados en el pacto de dominación, fueron brutaemente reprimidas, y las aspiraciones de los campesinos a construir con sus luchas un orden social más justo regresaron a los niveles subterráneos de la conciencia, que no se expresan en forma abierta.

El desarrollo dual y la crisis de la agro-exportación

La vulnerabilidad del modelo agro-exportador y el alto costo social de la modernización conservadora comenzaban a manifestarse a mediados de la década del '80. En efecto, el control creciente de la tierra por parte de las grandes empresas contribuyó a la disminución del ritmo de la colonización oficial. Por otro lado, estas grandes empresas ocupaban poca fuerza de trabajo³. En este modelo de desarrollo dual, mientras crecía el sector de las grandes empresas también se fue intensificando la pobreza rural.

Con el estancamiento productivo crece la desocupación. La caída del precio de las materias primas en el mercado internacional se proyecta en la disminución sostenida del ingreso campesino⁴. Diversas fueron las reacciones campesinas ante los efectos en la economía campesina de las transformaciones anotadas: desaceleración de la colonización oficial, caída del ingreso real y aumento de la desocupación/subocupación.

La respuesta campesina más frecuente fue la invasión de tierras libres o latifundios improductivos: se intensificó entre 1983 y 1986, e involucró por lo menos a 15 mil familias campesinas. Se trata de unas 60 invasiones aisladas entre sí aunque altamente eficientes, que movilizan a los campesinos hasta la consecución de la parcela familiar, luego de la cual vuelven a su atomización social e individualismo habituales.

También surgen movimientos con una clara orientación sociopolítica que se articula en una perspectiva de transformación de la sociedad, la cual proponía cambios básicos en las relaciones sociales y políticas predominantes. En todos los casos fueron experiencias fragmentarias, muy localizadas y aisladas entre sí, pero que aún así contribuyeron al fortalecimiento de identidades colectivas. Este sentido de pertenencia a una colectividad que comparte una cultura, una lengua, agravios y luchas, se reaviva con las movilizaciones aun cuando los campesinos involucrados no articulen su acción a escala regional o nacional.

De hecho, en la fase final del orden autoritario, las demandas, que pasan a tener un carácter múltiple (acceso a la tierra, derecho de organización, condiciones de comercialización adecuadas, etc.), se plantean ya en el escenario nacional. Las luchas por la tierra se transforman en masivas y se tornan más intensas. En respuesta a nuevos condicionamientos se incorporaban elementos también nuevos en las movilizaciones. La respuesta frecuente consistió en el cerco represivo de los ocupantes y el desalojo violento de la fracción ocupada; incluso, en la contratación de bandas armadas para disuadir a los ocupantes.

Las movilizaciones campesinas en la transición a la democracia

El derrumbe del orden autoritario⁵ representó el final de una larga historia de opresión política y la vigencia de las libertades públicas por un período de tiempo que constituye ya el más prolongado del período independiente. No obstante sus logros, esta democracia emergente no significó en realidad una representación efectiva de los intereses campesinos en la esfera del estado. Una seguidilla de actos electorales (elecciones presidenciales, municipales, incluso de convencionales constituyentes) representó la iniciación política de los campesinos.

Desde el punto de vista organizativo, la democratización significó la incorporación creciente de los campesinos a organizaciones de tipo gremial, que buscaron

la representación de los intereses de sus adherentes en la esfera del estado y ante otros actores sociales. El proceso de globalización asociado a la inacción del estado ha provocado la constitución de múltiples asociaciones que reaccionan ante los excesos de las grandes corporaciones, resultando notable cómo algunas organizaciones de base logran en algunos casos (asentamiento Maracaná, Isleños de San Cosme, etc.) mayor resonancia que organizaciones regionales y nacionales.

Los desencuentros ideológicos entre grupos campesinos contribuyen a la atomización de las organizaciones, a tal punto que a fines de 1992 los 70 mil campesinos afiliados a 753 bases distribuían su adhesión a 53 organizaciones regionales, integradas a su vez a 10 organizaciones nacionales.

Una publicación del CDE de 1994 (Dávalos y Rodríguez, 1994[a]) refiere la existencia de 13 organizaciones nacionales censadas, 58 organizaciones regionales, 111 zonales, y 768 comités de base, incluyendo 82 comités de mujeres. El Censo en cuestión comprendió a 36.265 campesinos organizados, de los cuales 11.599 fueron mujeres. Esta población censada representaba menos del 4% de la población rural de 18 años y más. Con criterios menos estrictos, según el Censo Agropecuario de 1991, el 13,5% de los operadores de las 307.221 explotaciones pertenecía a algún tipo de organización, incluyendo comités de crédito y de comercialización. Considerando las organizaciones regionales y zonales censadas, la mayor densidad corresponde a Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná e Itapúa (Dávalos y Rodríguez, 1994[b]).

Estos campesinos organizados se especifican algunos por su orientación político-clasista unos, gremial-reivindicativa otros, pasando por los de orientación cristiana. Lo dominante en las demandas de estas organizaciones es la reivindicación del acceso a la tierra y la prosecución del apoyo a los asentamientos ya constituidos. Precisamente, las coincidencias permiten a estas múltiples organizaciones articular algunas de sus demandas y movilizaciones.

La conducta aparentemente contradictoria de las capas campesinas organizadas, que pese a la atomización de sus organizaciones coordinan gestiones específicas y acciones puntuales, pasa a ser una constante. Lo ordinario es la atomización, que no impide acciones comunes ante circunstancias extraordinarias.

De hecho, ningún legislador es campesino, aunque los ejes de clientelas rurales se auto-proclaman campesinos. La situación campesina más bien empeoró con la democracia, ya que los grupos con orientación oligárquica y los segmentos del empresariado que fueron forjados por el orden autoritario pasaron a detentar más poder. Desde la perspectiva de los campesinos organizados, la democracia vigente es sinónimo de repartija de cargos, y no tiene nada que ver con la capacidad de la gente común de decidir qué caminos tomar o qué controles políticos deben ejercerse sobre el mercado.

En la Asamblea Constituyente de 1992 se expresó una vez más la disociación entre demandas sociales y sistema político. En esa ocasión, los convencionales

aceptaron las propuestas de la Asociación Rural del Paraguay, que nuclea a los grandes propietarios, y aprobaron una disposición que establece el pago por adelantado y a satisfacción del propietario en el caso de las expropiaciones (artículo 109 de la Constitución Nacional). Una norma notable establece que para cada expropiación debe dictarse una ley: en este caso la generalidad de la Ley no cuenta, y se da un caso paradójico de un estado de derecho en el que no se consideran los principios generales del derecho. De ese modo quedaba consumado otro retroceso en materia legislativa.

En el nuevo contexto continuó agravándose la crisis agraria y los problemas se fueron acumulando. Ahora es la economía rural en su conjunto la que se resiente, a tal punto que el crecimiento sectorial en el período 1995/98 fue sólo del 2,2% anual acumulativo. Sólo la Administración Pública creció en forma sostenida desde el advenimiento de la democracia (Véase Anexo 2). En una población de 4,5 millones que duplica la población de 20 años atrás, se extendió e intensificó la pobreza rural. La emigración a Buenos Aires y a los centros urbanos de Paraguay disminuyó la importancia relativa de la población rural -que representa en el último censo el 50% del total- y aumentó la marginalidad urbana. Tan irrelevante fue la democracia de cara a los intereses campesinos, que para 1995 la pobreza moderada afectaba al 55% de los hogares rurales y la indigencia ya alcanzaba el 33,6% de los hogares. Tres años antes, la pobreza severa afectó al 29% de los hogares.

Ya bajo el régimen democrático, la disminución en los niveles de actividad económica y la presión inflacionaria se refleja en la aceleración de la caída del ingreso campesino. Las expectativas campesinas en relación al estado democrático se expresaron en la intensificación de las invasiones en los meses que siguieron a la caída del orden autoritario. Los campesinos movilizados asociaban así democratización y acceso a la tierra.

En los primeros tres meses que siguen a la caída de la dictadura (3 de febrero de 1989) se plantearon también demandas políticas (demandas de justicia, proceso a torturadores, cese de persecuciones y libertad de organización). El carácter étnico de las movilizaciones se expresó en los reiterados reclamos de fin de la venta de tierras a los extranjeros. En este contexto, la conciencia nacional, que es un elemento básico para encarar el desarrollo, pasa a ser alimentada sólo por los campesinos.

La demanda de tierras del sector empresarial y la concentración de las tierras aptas para la agricultura en el mismo sector -sin generar empleo productivo-, sumadas a la orientación del gobierno que busca evitar la expropiación, llevaron a la constitución de colonias en tierras no aptas para la agricultura. La orientación del Estado, que pierde la capacidad de regular los procesos socioeconómicos, se corresponde con la creciente internacionalización de la economía, que se va desligando de controles políticos.

Cuadro 1

Movilizaciones campesinas 1990-1993

Años	Detenciones	Nº de conflictos	Ocupaciones	Desalojos
1990	820	99	49	51
1991	566	66	17	23
1992	120	50	16	16
1993	128	46	14	17

Fuente: CDE. **Informativo Campesino**. Asunción. 1994

En ese contexto, la Reforma Agraria, incorporada en la plataforma electoral del militar que liderara el derrocamiento del dictador, quedó en el nivel retórico, a tal punto que los asentamientos habilitados luego de la caída del orden autoritario resultaron, en la gran mayoría de los casos, de presiones campesinas. El pico de las movilizaciones orientadas al acceso a parcelas familiares se da en los meses siguientes al derrocamiento de la dictadura, sólo en los dos primeros.

Las movilizaciones campesinas se fueron intensificando a medida que sus expectativas iniciales eran defraudadas, y asumieron nuevas formas a partir del segundo gobierno democrático, esta vez encabezado por un civil (agosto de 1993). La pobreza creciente, y la falta de respuesta desde el gobierno, inciden en la intensificación de las ocupaciones de fracciones incultas en los meses de mayo/julio de 1994, mostrando la tendencia a repetir la experiencia de 1989 (año de mayor ocupación de tierras).

Por otra parte, con este segundo gobierno democrático las organizaciones movilizadas pasaron a plantear directamente sus reclamos, asumiendo su propia representación y descalificando la mediación de los partidos políticos -que van perdiendo credibilidad y los restos de legitimidad. En esa lógica, ante la ausencia de canales apropiados de diálogo y concertación entre la población rural y los organismos del estado, la acción directa es más pertinente.

Lo novedoso de las movilizaciones es que las mismas se articulan ahora a nivel regional primero, y nacional después. Así, en el departamento de San Pedro de Ykuamandyjú, donde la movilización campesina es más intensa, las acciones son coordinadas entre 27 organizaciones campesinas. En el referido Dpto. San Pedro, que puede dar una idea de la situación general, las movilizaciones campesinas alcanzaron mayor intensidad, coincidiendo con una marcada concentración de tierra y la coexistencia de explotaciones campesinas con establecimientos ganaderos de grandes extensiones. En este caso, como en otros, las organizaciones

campesinas lograron coordinar su acción a pesar de la heterogeneidad de sus orientaciones. En ese sentido debe tenerse presente que la Coordinación Intersectorial se basa en grupos formados con el apoyo de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, con líderes con arraigo local y regional. Hacia el sur del Departamento, los grupos están más ligados a partidos de izquierda.

Entre las demandas planteadas por los movimientos y las organizaciones predominan las de tipo económico corporativo. Estos campesinos reivindican básicamente el acceso a parcelas familiares y, últimamente, a condiciones mínimas de comercialización del algodón. Las luchas por la tierra implicaron hasta 1993 12 ocupaciones de grandes fracciones no explotadas desde 1989. De estas ocupaciones, solamente no resultó exitosa la ocupación de la fracción Campos Mborombí del Senador oficialista Blas Riquelme. En algunos casos las ocupaciones fueron muy peleadas, como la de Cororó, en julio de 1990, que implicó mucha tensión y arrojó como saldo 5 heridos.

En todos estos casos los campesinos movilizados enfrentaron fuertes intentos de desalojo, pero ganaron en base a una buena organización y al desarrollo de estrategias que representan una suerte de maduración de las luchas anteriores. Las mismas incluían la ocupación por centenares de familias de una fracción sin explotar, la permanencia en los costados de la fracción durante meses luego de los desalojos, la nueva ocupación de la fracción ingresando por otro sector de la misma y las negociaciones con el gobierno y con los propietarios. Las referidas estrategias complicaron terriblemente la represión, que se tornaba costosa también en términos económicos.

La crisis campesina y las protestas campesinas de 1994

Las comentadas reacciones de los campesinos del norte no son aisladas, ya que las movilizaciones, aunque con menor intensidad, se han estado dando en todo el país. En efecto, en el plano nacional, desde los primeros meses del primer gobierno civil, las organizaciones campesinas que se movilizaban anteriormente para cuestiones puntuales comenzaron a articular sus demandas y sus acciones a través de la Organización Interdepartamental Campesina (CIOC) y de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas.

En diversas regiones del país ejercen presión con concentraciones regionales, clausurando rutas, a fin de forzar la negociación con organismos oficiales. Las movilizaciones convergieron en una marcha campesina multitudinaria sin precedentes en la capital del país el 15 de marzo. Ante las sucesivas fallas del estado en sus políticas de desarrollo, los campesinos buscan espacio en las esferas del estado como cultivadores de algodón guaraní parlantes, explotados por otros sectores de su sociedad.

Como resultado de esas formidables movilizaciones, que parecen expresar que los campesinos despiertan de su largo letargo, buscan negociar a alto nivel con el gobierno y se legitiman plenamente como un sector de la sociedad con derecho a expresar sus demandas, aunque los grupos dominantes permanezcan sordos a ellas. Las capas campesinas retoman así, 20 años después, las utopías que se habían expresado con las Ligas Agrarias, y que vuelven a aflorar.

En la mesa de negociaciones con representantes del gobierno los cultivadores plantean las siguientes demandas básicas: “la agilización de los trámites para regularizar la tenencia de parcelas familiares en ocupaciones”, la prestación de asistencia inmediata a los asentamientos abandonados a su suerte, la participación en la elaboración de las políticas agrarias y la fijación de precios mínimos para el algodón. En ocasión de la segunda marcha, en marzo de 1996, las organizaciones campesinas incluyeron nuevas demandas.

En las nuevas demandas se impugna la versión oficial del neoliberalismo que pretende acabar con todo control político sobre la economía. Así, en el caso del MERCOSUR, se asume en el discurso dominante que la integración y el proceso de globalización inevitablemente conducen a la desaparición del control del estado sobre los mercados. A la apertura ilimitada que se propone oficialmente en el marco del MERCOSUR, los campesinos plantean el retiro del Paraguay de este Tratado. En la perspectiva campesina, si la integración supone empobrecimiento e imposibilidad de defender los intereses de los compatriotas, entonces al diablo con la mentada integración.

La pretensión de achicar el estado hasta el punto de amputarlo brutalmente, es rechazada por los representantes de las organizaciones campesinas en varios de los puntos que plantean en sus demandas. El pedido de participación en las políticas implica la transformación del estado, mientras que con la demanda de precios mínimos los campesinos impugnan la equiparación entre la libertad y el libre juego de las fuerzas del mercado. Para el actor campesino emergente, el hecho de que el estado regule el mercado no constituye amenaza alguna a la libertad. Aunque estas demandas no sean satisfechas o lo sean sólo parcialmente, lo destacable es el reconocimiento que implica la negociación con altos representantes del gobierno.

Además de las organizaciones y movimientos que se articulan entre sí y se expresan en el nivel regional y nacional, se van constituyendo sujetos colectivos especiales, que a su modo resisten los efectos de la globalización. Como caso ilustrativo puede apuntarse el de los campesinos de San Cosme y Damián, pobladores de islas inundadas por la represa de Yacyretá, quienes bloquearon durante semanas las obras civiles que ya llevan una inversión de 8 mil millones de dólares. Esta población afectada cuenta como aliado al gobierno municipal, que incluso prohibió la circulación de máquinas de la entidad binacional.

Recapitulando, puede señalarse que desde el ángulo de la sociedad civil la democracia pluralista va emergiendo impulsada por organizaciones de distintos sectores que aceptan el derecho a participar de todos por igual. Los campesinos aportan lo suyo en esa dinámica, pero no resuelven el problema de la representación de sus intereses en el sistema político. En ese contexto, los campesinos ganan autonomía con relación a los partidos políticos, mientras dan un alcance más instrumental a sus movilizaciones.

Como resultado de las transformaciones operadas, los movimientos y organizaciones campesinos, que aumentan la capacidad negociadora de las capas de pequeños productores, condicionan favorablemente la democratización de la sociedad civil y del estado. En este sentido debe tenerse en cuenta que la misma transición también afecta la forma y el carácter de las organizaciones campesinas, que buscan mayor protagonismo y la satisfacción de sus demandas mediante alianzas adecuadas con otros actores sociales y políticos, pero sin dejar de lado las tomas de tierra.

La transición a la democracia asociada a la descentralización facilita la multiplicación de las organizaciones campesinas y la expansión de las existentes. El emergente poder local tiene como aliado potencial a los gobiernos municipales, que ganan espacio con la descentralización.

La sucesión de eventos en los últimos meses muestra la disposición de los campesinos a una movilización creciente, sobre todo para acciones puntuales como la clausura de rutas, que no tienen un costo alto, y sí pueden dar beneficios significativos. No se trata sin embargo de la primacía de la racionalidad puramente instrumental que desplaza a la racionalidad basada en valores. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la corrupción desde las esferas del estado se tornó más visible y hasta irritante, como si hubiesen surgido nuevos estándares de justicia asumidos por los campesinos. Ante los ojos de éstos el estado democrático pierde legitimidad, ya que los que detentan el poder no están cumpliendo bien su trabajo. En realidad, a los campesinos no les interesa una democracia de fachada, sin mecanismos efectivos de representación de sus intereses sociales.

En contraste con las acciones puntuales relativamente fáciles, los campesinos se ven limitados para movilizaciones más prolongadas, y en esa medida enfrentan dificultades para alterar las condiciones de su inserción social, que en realidad se va deteriorando en forma alarmante. La liberalización económica que vino con el inicio de la transición a la democracia atrajo a la inversión extranjera, pero no se orientó a la producción de bienes, mientras que el abaratamiento de las importaciones aumentó el déficit comercial y debilitó aún más a la frágil industria doméstica. Por otra parte, el aumento del crédito en un contexto de marcada corrupción llevó a quiebras fraudulentas en el sector financiero, que costarán al estado una suma que se aproxima al 10% del PIB (Molinas, 2000). Estos descalabros, sumados al ensanchamiento del aparato estatal, siguiendo con la lógica del

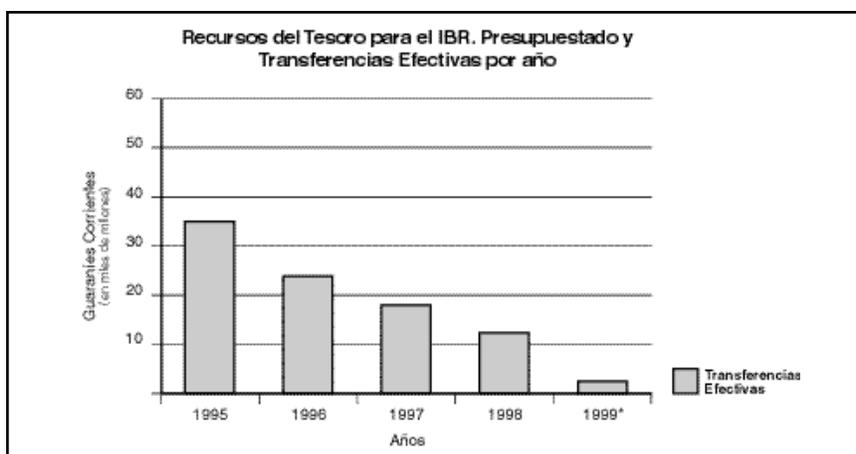
clientelismo, ya no dejaron recursos para la reactivación de la economía, y la pobreza rural se intensificó.

A medida que se agudiza la pobreza en el campo, desde el estado se van asignando menos recursos al Instituto de Bienestar Rural, entidad que ejecuta los programas nacionales de colonización y que debió ser el instrumento para luchar contra la pobreza (Fogel, 1999). La pronunciada caída en la asignación de recursos (Figura 1) muestra la indiferencia con que la clase política considera a la cuestión campesina. En ese medio, en el que las vías legales son inconducentes, sólo quedaban disponibles los desbordes, la ocupación de tierra y el cierre de rutas. Esas son las formas que utilizan los campesinos del país -quienes aún representan casi la mitad de la población-, excluidos de las políticas y marginados de procesos de concertación que canalicen sus demandas.

La magnitud de los conflictos es tal, que en 1999 ganan notoriedad 52 conflictos, los cuales involucraron a 7.397 familias que ocuparon fincas por aproximadamente 100.000 has. (véase Cuadro 2).

En 1999 la cantidad de conflictos y de ocupaciones duplica a la del año anterior. Es de destacar que la mayor cantidad de familias involucradas en las movilizaciones que reivindican el acceso a la parcela familiar, corresponde a los departamentos norteros (San Pedro y Concepción) y a los departamentos del borde este de la Región Oriental, con mucha presencia de propietarios brasileños (Alto Paraná y Kanindeyú). En estos casos, las movilizaciones de campesinos guaraní parlantes que ocupan tierras de brasileños tienen un claro alcance étnico, lo que da mayor intensidad a los conflictos. En San Pedro el campesinado combativo se expresó ya desde hace años, y su densidad organizativa es mayor que en otros departamentos.

Figura 1



Fuente: CDE. **Informativo Campesino**. Asunción 2000. *Octubre de 1999

Los movilizados incluían a los “sin tierra” mismos, y a aquellos que ya habían accedido a parcelas familiares en suelos marginales abandonados luego de la comercialización de la producción forestal (madera, postes, leña y carbón). Ante la inexistencia de políticas orientadas a la consolidación de los asentamientos, los campesinos empobrecidos se orientan por la lógica del estómago, de corto plazo, sin considerar lo que ocurrirá después. Con frecuencia estos campesinos transfieren sus derechos de ocupación a compradores que suelen agregar varias parcelas para la explotación ganadera.

Cuadro 2

Distribución de conflictos campesinos ligados a la tierra por región en 1999

Departamentos	Cantidad de conflictos	Cantidad de hectáreas	Cantidad de familias
Concepción	6	10.607*	732*
San Pedro	7	15.202	1.519
Caaguazú	4	7.750	465*
Caazapá	5	13.150*	261*
Misiones	3	5.500	336
Paraguari	1	400	70
Itapúa	6	5.767*	487*
Alto Paraná	10	15.800*	2.260*
Ñeembucú	1	2.500	130
Amambay	3	2.400*	260
Canindeyu	4	10.180	810
Boquerón	1	5.000	0**
Presidente Hayes	1	200	67
Total	52	94.456	7.397

Fuente: CDE. *Datos parciales. **Sin datos

La intervención campesina en el golpe de estado del marzo paraguayo (1999)

El estilo de desarrollo basado en la agro-exportación y la triangulación comercial estaba agotado a fines de siglo en el Paraguay. El agrupamiento social de comerciantes ligados a la triangulación tenía que buscar una nueva posición en la estructura social. Del empresariado doméstico, que siempre fue frágil, como su

clase obrera, sólo la facción liderada por los barones de Itaipú podía imponer su hegemonía. Este grupo, que bajo la sombra del régimen autoritario había logrado una notable acumulación, acrecentó aún más su poder con el control del aparato estatal en el período 1993-1998. Sólo de la quiebra fraudulenta de diversas entidades del sistema financiero, se extrajo del Estado una monumental suma que se aproxima al 10% del producto interno bruto. En la estructura social aparecía ya una suerte de empresariado de la corrupción, una nueva industria sin humo.

En la coyuntura pre-electoral de 1998 triunfó en las internas del partido oficialista una dupla (Presidente de la República, Vicepresidente) que planteaba en serio la lucha contra la corrupción, y que ganó holgadamente las elecciones nacionales. Pero pronto se enfrentó a los barones de la monumental corrupción, que controlaban los medios masivos de comunicación y en esa medida tenían gran capacidad de manipulación. Entre tanto, los campesinos que, agobiados por las deudas y la caída de sus ingresos buscaban la condonación de sus deudas, se aliaron a quienes les prometieron su apoyo, y que en ese momento buscaban el derrocamiento del gobierno.

A los siete meses de gobierno, en otro marzo campesino, ante desórdenes callejeros, aprovechando la presencia de 15.000 campesinos y las manifestaciones de jóvenes, las Fuerzas Armadas dan la espalda a su Comandante en Jefe y se declaran leales al Congreso, forzando la renuncia del Presidente de la República y la constitución de una curiosa alianza encabezada por los barones de Itaipú y de la corrupción y por la vieja guardia de Stroessner. La victoria campesina fue pírrica: obtuvieron la condonación de sus deudas, pero reinstalaron en el poder a sus verdugos, y sólo se destinaron sumas irrisorias para la colonización, apenas unos 2 millones de dólares al mes de octubre de 1999 (Figura 1). Para colmo, el protagonismo campesino en la plaza del Congreso fue desconocido por la prensa, que sólo otorgó créditos a la "heroica juventud". En esas condiciones sólo se podría prever el crecimiento de movilizaciones y desbordes. La otra alternativa, compatible con un estado social de derecho, pasa por políticas agrarias que viabilicen las explotaciones campesinas, y no necesariamente por condonaciones de deudas, inconducentes aunque produzcan un alivio circunstancial.

Ganaron notoriedad 54 manifestaciones en las que se movilizaron 70.700 manifestantes, cifra más alta que en años anteriores (Cuadro 3). La mayor cantidad de movilizaciones corresponde a Asunción. En ellas se condenaron las políticas neoliberales y se reclamaba la condonación de deudas; participaron campesinos de diversos departamentos. En Caaguazú se movilizaron por la libertad de compañeros presos, las exigencias de pagos a los acopiadores y la condonación de deudas. Estos son reclamos que se repiten en otros departamentos.

El agravamiento de la crisis campesina en 1999 se nota comparando la distribución de conflictos de tierra y las manifestaciones de ese año con años anteriores (Cuadro 4). Así, mientras en 1998 fueron detenidos 429 campesinos, el año

siguiente esta cifra llegó a 1.049, y las manifestaciones pasaron de 17 a 54. En el año se reportó el asesinato de seis campesinos, en el marco de estos conflictos, cuatro de ellos probablemente por matones armados por los hacendados brasileños (CDE, 1999). La Federación Nacional Campesina (FNC) contabiliza treinta y cinco líderes campesinos asesinados en los últimos años.

A principios del 2000 la situación se complica por calamidades naturales (heladas severas y prolongadas; sequías) que provocan la pérdida de buena parte de los cultivos. Ante la falta de respuesta frente a sus reclamos, las diversas organizaciones se van radicalizando. Una parte importante de ellas está articulada por la Federación Nacional Campesina (FNC), y tiene como punto culminante la segunda ocupación de la estancia La Esperanza -situada en General Resquín, Departamento de San Pedro-, de unas 30.000 has., propiedad del brasileño Evaldo Araujo. Poco después de iniciada esta segunda ocupación, el 9 de enero, un sangriento desalojo provoca tres bajas campesinas y 32 heridos. Estos tres campesinos muertos por la policía se suman a uno más que había sido asesinado el 14 de noviembre anterior en la misma fracción.

Cuadro 3

Distribución de manifestaciones campesinas por región en 1999

Departamentos	Cantidad de manifestaciones	Cantidad de manifestantes
Alto Paraná	3	1.450
Amambay	2	0**
Asunción	8	35.550*
Caaguazú	11	11.300*
Canindeyú	1	1.000
Central	2	0**
Concepción	10	9.550*
Cordillera	2	4.000*
Guairá	3	500*
Itapúa	2	3.500
Misiones	4	350*
Paraguari	2	0**
San Pedro	4	3.500*
Total	54	70.700

Fuente: CDE. *Datos Parciales. **Sin datos.

A partir de ese momento, las movilizaciones se multiplican: solamente el 11 de enero, organizaciones de distintos puntos de nuestro país se manifiestan bajo la consigna de “tierra o muerte”. En Caaguazú, 1.000 manifestantes se desplegaron en protesta por el brutal desalojo y bloquearon la ruta; en Itapúa también bloquearon la ruta, lo mismo que cerca de la capital; en Curuguaty, la Asociación Regional Campesina de Kanindeyú movilizó a 100 campesinos en el bloqueo durante 4 horas de la ruta Las Residentas, mientras que 500 familias campesinas permanecieron frente la propiedad reivindicada, de la que habían sido desalojadas.

Como en otras oportunidades en las que el gobierno reacciona ante situaciones críticas para apagar incendios en vez de evitarlos, los campesinos consiguieron el día 12 de enero que el gobierno adquiriera 5.000 has. de la estancia La Esperanza, y asumiera el compromiso de adquirir 3.200 has. más en las inmediaciones. Las 5.000 has. conquistadas por los campesinos tienen especies forestales de valor comercial.

Cuadro 4

Distribución de conflictos de tierra y manifestaciones

Año	Conflictos	Ocupaciones	Desalojos	Detenciones	Manifestaciones
1990	99	29	31	820	34
1991	66	17	23	566	19
1992	50	17	16	120	15
1993	46	14	17	128	18
1994	57	26	24	411	60
1995	49	23	25	359	37
1996	54	20	27	553	39
1997	43	15	13	137	15
1998	28	14	11	429	17
1999	52	31	20	1.048	54
Totales	544	206	207	4.571	308

Fuente: CDE

El análisis de las interrelaciones entre estructura socioeconómica y coyuntura no permite avizorar escenarios optimistas de cara a los intereses campesinos y a una democracia sustantiva. Los rasgos salientes de la emergente estructura social muestran a un empresariado manufacturero débil y golpeado, al igual que la

facción ligada a la triangulación comercial, que llegó a su fin. La oligarquía ganadera no sufre cambios en su orientación, y mantiene su buen posicionamiento en la esfera del Estado. Los barones de Itaipú pasan a ser el actor hegemónico, muy ligados a la corrupción. Las capas campesinas cada vez más empobrecidas ganan a su vez protagonismo, pero sólo por vías de hecho. Las capas medias urbanas muy ligadas al Estado empiezan a sentirse inseguras ante la inevitable reforma de éste.

En el plano político el actor dominante se alía con la vieja guardia stronista, y desde la esfera del estado, acogotado por los gastos ordinarios para salarios y la inacabable corrupción, los intereses mayoritarios -los de los campesinos- no están representados. En una curiosa democracia liberal ya totalmente disociada de la soberanía popular expresada en las urnas, las demandas campesinas sólo se canalizan por medios violentos.

En la coyuntura actual, parte importante de las movilizaciones son articuladas por la Federación Nacional Campesina (FNC), mientras la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) busca con un frente sindical la sustitución del actual gobierno y pide la renuncia del Presidente de la República. Esta mesa coordinadora no logra aglutinar sino a una parte de las organizaciones campesinas, que incluyen: Organización de Lucha por la Tierra (OLP), Organización Nacional Campesina (ONAC), El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Coordinadora de Productores Agrícolas, y organizaciones regionales tales como la Coordinadora Campesina Cordillerana (CCC) y el Movimiento de Recuperación Campesina de Curuguay (MRCC)⁶.

Esta atomización de las organizaciones no impide acciones conjuntas, que van dando fuerza a la idea de que el orden social es el resultado de luchas sociales. Mientras tanto siguen confundidos -sin entrar en conflicto- la oligarquía terrateniente y el sector modernizante del empresariado, y se rechazan las políticas redistributivas que pudieran controlar las crecientes inequidades. En ese contexto, la pobreza y la descomposición social se agudizan. La mayor polarización de la estructura social resultante de esa forma de administrar la crisis implicará en ese escenario mayor inestabilidad y riesgos de restauración del orden autoritario. En este punto debe tenerse en cuenta que una democracia con hambre no genera adhesiones, por lo menos de los sectores excluidos. Considerando la estructura socioeconómica insostenible, sólo cabe esperar, en escenarios sin la gobernabilidad mínima necesaria, situaciones insospechadas de actores emergentes.

Bibliografía

- C.D.E. 1994 *Guía de Organizaciones Campesinas* (Asunción).
- C.D.E. 1999 *Informativo Campesino* (Asunción) N° 135.
- C.E.P.A.G. 1994 *Kokueguara Rembiosa* (Asunción).
- Dávalos M. y Rodríguez J. C. 1994[a] *Organizaciones Campesinas de Mujeres 1992-1993* (Asunción: CDE).
- Dávalos M. y Rodríguez J. C. 1994[b] *Censo de Organizaciones Campesina* (Asunción: CDE).
- Fogel, Ramón 1988 “Tierra y Democracia”, en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 96.
- Fogel, Ramón 1998 “Los movimientos campesinos y la democratización de nuestra sociedad”, en Caballero, J. y Céspedes, R. *Realidad Social en el Paraguay* (Asunción: CIPSED).
- Fogel, Ramón 1999 “Manejo de Recursos Naturales, Relaciones Sociales y Cultura”, en Fogel, R. y Hay, D. (eds.) *La Responsabilidad Social y la Visión del Futuro: Paraguay en el Siglo XXI* (Asunción: CERI/APPG).
- Galeano, Luis 1987 “El Desarrollo Socio Económico y Las Tendencias de la PEA en el Paraguay 1950-1982”, en *RPS* (Asunción) N° 70.
- Molinas, José 2000 “Luces y Sombras en la Transición Económica”, en *Última Hora* (Asunción).
- O’ Donnell, Guillermo *et al* (eds.) 1990 *Transition from Authoritarian Rule. Comparative Perspective*, (Baltimore and London: The John Hopkins University Press).
- Rivarola, Domingo 1988 “Política y Sociedad en el Paraguay Contemporáneo: El Autoritarismo y La Democracia”, en *RPS* (Asunción) N° 73.
- Schvartzman, Mauricio 1989 *Contribuciones al Estudio de la Sociedad Paraguaya* (Asunción: CIDSEP).

Notas

- 1 La superficie media de estas parcelas familiares fue entonces de 1,8 has.
- 2 Debe tenerse en cuenta que más frecuentes que las movilizaciones de tipo instrumental fueron, hasta la década del '60, las luchas pre-políticas o arcaicas tales como el referido bandolerismo social y los movimientos religiosos milenaristas (Fogel, 1988).
- 3 En ese sentido téngase en cuenta que en 1981 las explotaciones de 500 has. y más ocupaban a menos de 5000 asalariados permanentes (Fogel, 1988).
- 4 Así, mientras el costo de vida entre 1980 y 1986 subió 4 veces (3,9 para ser más preciso), el ingreso real campesino, medido a través de los precios de los principales cultivos, permaneció estable. Esto es lo que se llama empobrecimiento de las capas campesinas.
- 5 La derrota del orden autoritario se consuma con el golpe militar el 3 de febrero de 1989.
- 6 Sólo en el Departamento de San Pedro están activas La Asociación de Agricultores de San Pedro Norte, La Asociación de Agricultores Ojondivepá, La Asociación Independiente de Agricultores, ACADEI, y los capítulos regionales de la ONAC y de la FNC.

Anexo 1

Producción Agrícola e Industrial y Exportaciones 1982/97

Participaciones Sectoriales (%)	1960	1970	1980	1985	1990	1995	1998
Agricultura	36,40	31,60	26,00	27,70	27,54	26,49	27,29
Industria	15,80	19,20	18,60	17,50	16,07	14,84	14,10
Construcción, Electricidad	2,50	3,50	8,90	8,70	8,03	10,06	10,55
Comercio y Transporte	34,80	31,60	32,40	31,70	30,98	30,67	28,75
Administración Pública	4,30	6,00	3,90	4,60	4,50	5,07	5,64
Otros Servicios	6,20	8,30	10,30	9,90	9,38	9,19	9,63
Comercio y otros sectores urbanos no transables	47,80	49,30	55,40	54,80	52,90	54,98	54,58
PIB TOTAL	100,00						
Tasas de crecimiento sectorial (%)	1960-70	1970-80	1980-85	1985-90	1990-95	1995-98	1990-98
Agricultura	3,0	6,7	3,6	4,4	2,4	2,2	2,4
Industria	6,5	8,5	1,1	3,3	1,6	-0,5	0,8
Construcción, Electricidad	8,0	19,6	1,7	4,0	9,0	2,9	6,0
Comercio y Transporte	3,5	9,6	1,9	4,0	3,0	-0,9	1,5
Administración Pública	8,0	4,2	5,7	4,2	5,7	4,9	5,4
Otros Servicios	7,4	11,3	1,6	3,4	2,8	2,8	2,8
Comercio y otros sectores urbanos no transables	4,8	10,1	2,1	3,9	3,9	2,3	3,3
PIB TOTAL	4,5	8,8	2,3	3,9	3,2	0,4	2,9

Fuente: Banco Central del Paraguay, Cuentas Nacionales; Banco Interamericano de Desarrollo. Morley y Rob Vos, PNUD/BID/CEPAL.

Anexo 2***Producción Agrícola e Industrial y Exportaciones. 1982/97***

	1982	1988	1989	1990	1992	1994	1995	1996	1997
Agri/PIB(%) (precios constantes)	26.7	27.3	27.8	27.5	26.3	25.7	26.5	26.5	27.2
Industria (PIB%)		16.2	16.2	16.1	15.6	15.1	14.8	14.3	13.9
Exportaciones Agrícolas en US\$ millones	218	383	738	629	355	402	481	552	720
Exportaciones de Algodón en US\$ millones	122	210	307	333	209	171	297	218	97
Producción de Algodón en miles de ton.		630	642	631	420	461	330	139	323
Rendimiento del Algodón t/has	1.31	1.43	1.21	1.52	1.79	1.39	1.07	1.26	1.47
Algodón, área cultivada en miles de has.	243	441	533	415	235	332	307	111	220
Soja, Producción en miles de tons.	769	1615	1795	1033	1793	2212	2395	2670	3000
Rendimiento de la Soja t/ha.	1.94	1.88	1.98	1.87	2.82	3.01	2.87	2.84	2.82
Soja, área cultivada en miles de tons.	397	860	907	552	635	735	833	940	1065

Fuente: CEPAL, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, varios años. Los cálculos de las exportaciones de algodón son de CEPAL, *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*, varios años. Los cálculos de la producción 1998-1992 son del Banco Central del Paraguay, *Estimación de la Producción Agropecuaria* (varios años), para 1993-1997, *Cuentas Nacionales*, Banco Central del Paraguay, *Producción Agropecuaria: Síntesis y Estadística Económica* y Departamento de Economía Internacional.